

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

**PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

Visto el estado procesal del presente asunto, se provee lo conducente respecto del análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en esta acción de inconstitucionalidad.

Para tales efectos, es importante precisar que el uno de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia bajo los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. *Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.*

SEGUNDO. *Se declara la invalidez de los artículos 62, 63 y del 66 al 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, expedida mediante el Decreto No. 208, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiséis de mayo de dos mil veinte, en los términos del considerando quinto de esta decisión.*

TERCERO. *La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tlaxcala, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena y de educación inclusiva, en los términos precisados en el considerando sexto de esta determinación. (...)*”

En el referido fallo se indicaron los siguientes efectos:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

“SEXTO. EFECTOS. En términos de los artículos 41, fracción IV, 45, párrafo primero, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; así como invalidar por extensión todas aquellas normas cuya validez depende de la norma invalidada.

- 1. PRECEPTOS DECLARADOS INVÁLIDOS.** Conforme a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, se declara la invalidez de los artículos 62, 63 y del 66 al 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, expedida mediante Decreto No. 208, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiséis de mayo de dos mil veinte, por ser contrarios a lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en lo particular, a los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribunales y 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas
- 2. EFECTOS ESPECÍFICOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ.** Atendiendo a la facultad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite, conforme a lo dispuesto en los citados artículos 41 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme a jurisprudencia P./J. 84/2007, cuyo rubro es: **“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS.”**

En esa jurisprudencia se sostiene que los efectos que este Tribunal Constitucional imprima a sus sentencias estimatorias en la vía de acción de inconstitucionalidad deben, de manera prioritaria, salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional violada, aunque al mismo tiempo se debe evitar generar una situación de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las normas impugnadas, así como afectar injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos, (federales, estatales y/o municipales).

Lo anterior, determina que este Tribunal Pleno cuenta con un amplio margen de apreciación para salvaguardar eficazmente la norma constitucional o convencional violada. Por ello, este Tribunal Pleno no ha tomado decisiones en que el efecto consistió únicamente en la expulsión de las porciones normativas que presentaban vicios de inconstitucionalidad; en otros casos, el efecto ha consistido en la expulsión de todo un conjunto armónico de normas dentro del ordenamiento legal impugnado; e, inclusive, se

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

han expulsado del orden jurídico nacional leyes u ordenamientos completos por existir violaciones muy graves a las normas que rigen el procedimiento para su creación. Asimismo, en ocasiones, el efecto de las sentencias se ha postergado por un lapso razonable y, en otros casos, el efecto ha consistido en la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a las que han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, para garantizar el mínimo indispensable de certeza jurídica.

Cabe puntualizar que, si bien en diversos precedentes esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un plazo de seis meses para que los congresos locales den cumplimiento a las declaraciones de invalidez derivadas de la falta de consulta de los pueblos y comunidades indígenas, o de doce meses, tal como se determinó en las acciones de inconstitucionalidad 84/2016, 81/2018 y 201/2020, e incluso, de ciento ochenta días naturales para el surtimiento de efectos de la declaración de invalidez de actos legislativos respecto de los cuales se omitió la consulta previa a las personas con discapacidad, lo cierto es que, tomando en consideración las serias dificultades y riesgos que implicaría celebrar las consultas respectivas durante la pandemia por el virus SARS-COV2, y el desarrollo de un número significativo de elecciones que se han celebrado o están por celebrarse en el país y que, consecuentemente, tendrán implicaciones en el relevo de las autoridades; con fundamento en lo previsto en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que la declaración de invalidez de los artículos 62, 63 y 66 al 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, relativos a sus capítulos VI de la Educación Indígena y VIII de la Educación Inclusiva, debe postergarse por dieciocho meses con el objeto de que la regulación respectiva continúe vigente en tanto el Congreso del Estado de Tlaxcala cumple con los efectos vinculatorios precisados en el siguiente apartado de este considerando, lo que permitirá incluso, la eficacia de los derechos humanos a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, así como a la de las personas con discapacidad.

EFFECTOS VINCULANTES PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Tomando en cuenta que el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el ejercicio de su libertad de configuración y considerando lo establecido en los artículos 1, 4 y 56 al 58, así como del 61 al 68 de la Ley General de Educación, determinó regular en los artículos 62, 63 y del 66 al 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala aspectos relacionados con la educación indígena y la educación inclusiva, debe estimarse que la invalidez de dicha regulación, derivada de la ausencia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como la de las personas con discapacidad, ha de traducirse en una consecuencia acorde a la eficacia de esos derechos humanos, por lo que se impone concluir de que la declaración de invalidez de la referida regulación no se limita a su expulsión del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros establecidos en el considerando quinto de esta determinación y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes precisados, con base en los

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

resultados de dichas consultas, emita la regulación que corresponda en materia de indígena, así como de educación inclusiva.

Por lo expuesto, se vincula al Congreso del Estado de Tlaxcala para que, dentro de los dieciocho meses siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutive de esta resolución, fecha en que surtirán efectos la declaración de invalidez decretada, lleve acabo conforme a los parámetros fijados en el considerando quinto de esta decisión, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como la de las personas con discapacidad y, posteriormente, emita la regulación correspondiente en materia de educación indígena y de educación inclusiva.

Lo anterior, en el entendido de que las consultas no deben limitarse a los artículos declarados inconstitucionales, sino que deberán tener un carácter abierto, a efecto de otorgar la posibilidad de que se facilite el dialogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados en relación con cualquier aspecto regulado en la Ley de Educación para el Estado que esté relacionado directamente con su condición indígena o de discapacidad.

El plazo establecido además permite que no se prive a los pueblos y comunidades indígenas ni a las personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos de las normas y, al mismo tiempo, permite al Congreso del Estado de Tlaxcala atender lo resuelto en la presente ejecutoria. Sin perjuicio de que en un tiempo menor la legislatura local pueda legislar en relación con los preceptos declarados inconstitucionales, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realicen las consultas en los términos fiados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De lo anterior, se desprende que la causa que generó la invalidez del Decreto combatido fue **la falta de realización de consulta en materia indígena y de personas con discapacidad previa a la expedición del Decreto doscientos ocho, que contiene la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.**

Así, de una lectura integral de la sentencia, sus consideraciones, efectos y resolutive, es posible advertir que su debido cumplimiento dependió que, dentro del plazo de dieciocho meses siguientes a la notificación de los puntos resolutive de la sentencia, el Congreso del Estado de Tlaxcala¹ cumpliera dos lineamientos concretos:

¹ La notificación de los puntos resolutive dictados en este expediente, contenidos en el oficio SGA/MOKM/82/2021, al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, tuvo lugar el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 5615/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

- a) Desarrollar las consultas a los pueblos, comunidades indígenas, afromexicanas y de las personas con discapacidad
- b) Legislar en la materia de educación respecto de estos dos grupos vulnerables.

Estudio.

Como quedó indicado, la sentencia vinculó al Congreso estatal a realizar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad como lo mandata la Constitución, el artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, para que, posteriormente, legislara lo correspondiente en materia de educación con los ajustes que se estimaran pertinentes; esto, dentro del plazo señalado con anterioridad.

A) Realización de la consulta en materia indígena.

Sobre dicho estándar, conviene realizar algunas precisiones. El Tribunal Pleno, retomando la doctrina internacional existente sobre la materia, ha sostenido que los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de afectar a pueblos y a comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas con discapacidad deben observar, como mínimo, las siguientes cinco fases:

- a) **Fase preconsultiva** que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados, la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas y personas con discapacidad.
- b) **Fase informativa** de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa,

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.

- c) **Fase de deliberación interna.** En esta etapa —que resulta fundamental— los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente.
- d) **Fase de diálogo** entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas y afroamericanas con la finalidad de generar acuerdos.
- e) **Fase de decisión,** comunicación de resultados y entrega de dictamen.

B) Realización de la consulta en materia de discapacidad.

Siguiendo con dicha doctrina, se señaló que como elementos mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad su participación debe ser:

- a) **Previa, pública, abierta y regular.** El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

- b) **Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad.** Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a los niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
- c) **Accesible.** Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben de ser accesibles a las personas con discapacidad.

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto en esta como durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

a) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

b) Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

c) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.

d) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

Actuaciones de cumplimiento.

En cumplimiento a dichos lineamientos, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala informó a este Tribunal sobre las acciones encaminadas a demostrar su observancia; en ese sentido, por diversas actuaciones se condujo el procedimiento tendente al cumplimiento, se destaca lo siguiente:

1. Consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.

1.1. Diseño metodológico y etapas formales del proceso.

El Congreso refiere haber elaborado un Proyecto de Protocolo de Consulta, en el que se definieron etapas: etapa preparatoria; etapa de

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

consulta, actos y acuerdos previos; etapa informativa; etapa deliberativa; etapa consultiva, y etapa de seguimiento de acuerdos y verificación, detallando la coordinación interinstitucional, las sedes, horarios, los materiales informativos y las actividades realizadas en cada fase.

1.2. Alcance territorial y poblacional.

Con base en la información remitida, se advierte que se consultaron **los municipios de** 1. Huamantla; 2. Tlaxcala; 3. Apizaco; 4. San Pablo del Monte; 5. Chiautempan; 6. Calpulalpan; 7. Tlaxco; 8. Contla de Juan Cuamatzi; 9. Zacatelco; 10. Ixtlacuxtla; 11. Tetla; 12. Yauhquemecan; 13. Panotla; 14. Santa Cruz Tlaxcala; 15. Papalotla; 16. Nativitas; 17. Tzompatepec; 18. Xaloztoc; 19. Nanacamilpa de Mariano Arista; 20. Carmen Tequexquitla; 21. Alzayanca; 22. Hueyotlipan; 23. Totolac; 24. Españita; 25. Xaltocan; 26. Amaxac de Guerrero; 27. Terrenate; 28. Cuapiaxtla; 29. La Magdalena Tlaltelulco; 30. Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; 31. Apetatitlan de Antonio Carvajal; 32. Xicohtzinco; 33. San Francisco Tetlanocan; 34. Tepetitla de Lardizabal; 35. Tenancingo; 36. Teolochoico; 37. Ixtenco; 38. Sta. Catrina Ayometla; 39. Tepeyanco; 40. San José Teacalco; 41. Tetlatlahuca; 42. Atlangatepec; 43. Tocatlan; 44. Coaxomulco; 45. Sanctorum de Lázaro Cárdenas; 46. Santa Ana Nopalucan; 47. Muñoz de Domingo Arenas; 48. Santa Cruz Quilentla; 49. Mazatecochco de José María Morelos; 50. Santa Isabel Xiloxoxtla; 51. San Damián Texoloc; 52. Benito Juárez; 53. Santa Apolonia Teacalco; 54. San Juan Huactzinco; 55. San Lorenzo Axocomanitla; 56. Emiliano Zapata; 57. San Lucas Tecopilco; 58. San Gerónimo Zacualpan; 59. Acuamanala de Miguel Hidalgo y 60. Lázaro Cárdenas; en los que se incluyen poblaciones con este tipo de grupos vulnerables.

1.3. Detalle de los foros y mesas de trabajo.

Los foros regionales incluyeron registros de autoridades tradicionales para pueblos indígenas, asociaciones, organizaciones para las personas con discapacidad, la cual se difundió por distintos medios, personas que representan secciones de discapacidad por sede, actas de asistencia, fotos y opiniones.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

1.4. Sistematización documental.

Se elaboraron archivos físicos y digitales que concentran la documentación generada en cada etapa de la consulta, esto es, videos, fotografías, opiniones, listas de asistencia, acuerdos y sistematización temática de las propuestas.

1.5. Resultado legislativo.

El Congreso informó que se aprobó el Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación de las personas indígenas y con discapacidad del Estado de Tlaxcala.

C) Emisión de la legislación correspondiente.

Con fundamento en los resultados de los procesos consultivos antes descritos, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de las personas indígenas y con discapacidad.

Es un hecho notorio² que dicho Decreto fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés³.

Determinación.

De lo anterior y del análisis integral de las constancias, se concluye que el Congreso del Estado de Tlaxcala **dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito**, al haber:

- a) Llevado a cabo procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad; y
- b) Emitido la regulación correspondiente en materia de Educación de las personas indígenas y con discapacidad del Estado de Tlaxcala.

² En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como en la jurisprudencia P.JJ. 74/2006, de este Alto Tribunal, de rubro: "**HECHOS NOTORIOS. CONCEPTO GENERAL Y JURÍDICO**".

³ <https://publicaciones.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex24022023.pdf>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

En consecuencia, con fundamento en los artículos 44, 46, párrafo primero y 50 de la citada Ley Reglamentaria, **se declara cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.**

Maxime que las consultas realizadas y las normas que surgieron de las mismas, debieron ser materia de un nuevo medio de control constitucional; lo anterior por que si bien la Presidencia de este Tribunal está facultada para realizar un análisis sobre si se cumplió la sentencia, cierto es que corresponde al Pleno la determinación si una norma es inconstitucional, lo cual se haría por extensión en el supuesto que se concluya que las consultas no cumplieron con los parámetros fijados.

Archivo.

Derivado de lo anterior y toda vez que también obra la totalidad de las notificaciones relativas al asunto, con fundamento en los artículos 44, párrafo primero, 45, párrafo primero, 46, párrafo primero y 50 de la Ley Reglamentaria de la materia, **se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.**

Asimismo, de conformidad con lo ordenado en autos, la sentencia y los votos respectivos fueron publicados en el Semanario Judicial de la Federación⁴.

En ese sentido, se advierte que se cumplieron con las distintas etapas y principios que rigen e integran el proceso de consulta indígena, pero no corresponde a este pronunciamiento verificar si la consulta es válida desde el punto de vista sustantivo, ya que no fue materia de análisis en la presente ejecutoria, toda vez que el vicio de constitucionalidad que se buscó subsanar fue la omisión absoluta de consulta.

⁴ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/30772>
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/44740>
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/44738>
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/44739>
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/44741>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

Finalmente, no se advierte que el plazo en el que se realizó dicha consulta haya resultado excesivo o irrazonable atendiendo a la complejidad del proceso mismo, pues en función de las diversas etapas, así como del cúmulo de actos que cada una de éstas encierra, el tiempo empleado se encuentra justificado.

B) Emisión de la legislación correspondiente.

Con base en los resultados de dicho proceso, el Congreso del Estado aprobó el Decreto Número 205, emitido por la Legislatura local, por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

Determinación.

De lo anterior y del análisis integral de las constancias, se concluye que el Congreso del Estado de Tlaxcala **dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito**, al haber:

a) Llevado a cabo un proceso de consulta conforme a las fases y lineamientos establecidos por la Suprema Corte; y

b) Emitido y publicado el Decreto número 205, que sustituyó al decreto invalidado, con observancia al mandato constitucional y convencional correspondiente.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 44, 46, párrafo primero, y 50 de la citada Ley Reglamentaria, **se declara cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.**

Archivo.

Toda vez que obran todas las notificaciones relativas a la sentencia y votos formulados en relación con dicho fallo⁵, aunado a que resulta un hecho notorio que dicha resolución y votos se publicaron en el Diario Oficial de la

⁵ Conancias que obran a fojas 852, 855 a 857 y 870 del expediente.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 212/2020

Federación,⁶ en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,⁷ así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, una vez que cause estado el presente auto, **se ordena el archivo definitivo del expediente como asunto concluido.**

Formas de notificación.

Notifíquese por lista, por oficio a las partes, en su residencia oficial al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y mediante diverso electrónico a la Fiscalía General de la República.

En virtud que el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, tiene su residencia fuera de esta ciudad, vía **MINTERSCJN** gírese el despacho **1398/2025** al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que en el plazo de **tres días** realice la notificación respectiva.

Con la precisión al órgano jurisdiccional que al devolver el despacho **únicamente debe remitir la constancia de notificación y la razón actuarial correspondiente.**

Cúmplase.

Lo proveyó el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con **Fermín Santiago Santiago**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

Esta hoja corresponde al acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la **acción de inconstitucionalidad 212/2020**, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Conste.**
CIVA/FYRT/ILG

⁶ Constancias que obran a fojas 866 a 902 del expediente

⁷ Constancias que obran a fojas 905 a 928 del expediente.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	HUGO AGUILAR ORTIZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AUOH730401HOCGRG05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633000000000000000000042ad	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T23:47:40Z / 28/11/2025T17:47:40-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		5b d3 35 a0 6e 12 a2 6d 5f 72 a7 a7 59 ca 38 1e 3f 0e 29 3d 4e 56 a9 3b 5a a5 f5 b7 f8 c0 fb 22 21 24 1a c3 de de 8a fa 3d 0a 82 64 32 cf d0 f5 4c 40 f0 14 30 fd d9 a5 ed d6 8b 58 96 c4 ac b4 24 bb c2 f2 c6 76 77 1f 1e 49 2a c1 57 87 f7 b6 68 bd c0 a8 3b ac 28 66 ea be f3 1e c8 e5 a7 c5 c5 90 97 b6 70 60 7f 50 33 d8 79 1d ff 88 bc b7 d1 33 8f 3a 9a 14 62 78 c7 f6 a7 60 e0 21 46 71 13 84 26 c2 83 3b de 92 2a fd f5 a8 a9 ff 95 56 55 e7 dc 1f c5 e7 c7 33 c9 6f ee e9 fc 52 c7 f5 d8 16 15 61 e7 3d b3 e4 c1 08 98 65 dc 25 71 72 40 8f 92 d3 bf 2b 3d 4b 9b da e3 d5 46 2f 50 90 d0 d4 83 e8 2b 39 8a af 80 29 39 ac 93 35 4e 4a 37 ef 94 a8 48 60 e5 10 b1 5c d7 c5 08 1d 4f ec e0 49 af 37 30 4c e1 73 3f b0 72 14 47 78 2c 9c 24 fa 83 41 54 f3 a0 8f 0d e7 c3 e4 36 f0 38 2c 2b 30 32 89 b4 af b7 e9 1b 6e 49 37 4d df 0a a4 b6 a9 ed 64			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T23:47:41Z / 28/11/2025T17:47:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633000000000000000000042ad			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T23:47:40Z / 28/11/2025T17:47:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	783849			
	Datos estampillados	7ED4DBE5DEDB96862CDC9F86264162FEF3133F15C306440A1E1FCE9303FE824A7430			

Firmante	Nombre	FERMIN SANTIAGO SANTIAGO	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	SASF820211HOCNNR06			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a663200000000000000000007587	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T21:14:24Z / 28/11/2025T15:14:24-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		23 26 af b2 17 ee 2e 3c d6 ee f2 ca 67 67 25 9d 0f b7 b2 81 b5 0b 51 08 b2 e7 cb 84 d7 dc 48 94 ac f0 be a6 f0 be 65 0f 99 31 76 91 fc 3f 05 2d e4 46 6b bf 65 64 f5 1e 18 6b 16 e9 c2 1d 94 78 5f 49 2c 68 14 72 0f 90 46 b8 e3 88 ca fd e4 ed af ef 3c b8 10 87 c6 fd 5e 7f f1 8f 9d e4 06 97 8a e0 6b 54 0e 22 9f 70 de 36 b0 1b 71 4d 5c a1 dc 56 ab f4 62 bb 99 8d ab 00 c2 64 20 14 cf 6c 5e 0c 23 fc ca 32 e1 fb ff 7c d0 70 0c 10 15 d1 ae 27 a7 09 d1 38 00 d7 a1 9c d6 00 9b 5f ec 62 7a b8 d4 31 91 1a 07 46 d1 9d 19 0f fc 9e 34 56 03 aa 97 26 ec bc 76 b8 42 55 1f 9d 58 57 01 36 ce 02 bf 3e 17 0d d3 72 95 89 9e 12 25 4f 3f 20 f5 94 3d 33 db fe c5 fe 9f 38 2f 99 32 bd fd 1e e0 4c 88 0a 1b 1f 3d 3c b5 37 3c c0 cb 79 69 3f e1 bd c4 97 6a 17 6e cf cf 77 5e 04 f7 17 d3 5f			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T21:14:25Z / 28/11/2025T15:14:25-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a663200000000000000000007587			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	28/11/2025T21:14:24Z / 28/11/2025T15:14:24-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	782334			
	Datos estampillados	468809DF8996900A4C2E97879C3D8BD3F0588706DE2C3FB6FF41AE4409DFE6D588251			